

2 Participación, cooperación y gobernanza en las organizaciones sociales, el re-descubrimiento de la dimensión política

Karem Sánchez de Roldán

INTRODUCCIÓN

ELEMENTOS DE CONTEXTO PARA PENSAR A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

El devenir de las dos primeras décadas del siglo XXI ha puesto a prueba de manera singular en el contexto global y, en particular, en el latinoamericano, las relaciones que vinculan el Estado, el mercado y la sociedad. Catástrofes naturales, debacles económicas, proyectos políticos fallidos de los más variados signos, conflictos armados y guerras sin fin, cobran su precio en el ámbito social. A la exacerbación de los niveles de pobreza y desigualdad; intensas corrientes poblacionales de desplazados forzados, refugiados y migrantes en busca de mejores oportunidades; intensificación de la precarización del empleo; aumento de la informalidad laboral, de trabajadores subempleados, pero sobre calificados; número creciente de jóvenes sin horizonte de futuro —ni estudio, ni trabajo—; a la fragilidad y amenaza constante a los derechos humanos, por mencionar solo algunas circunstancias entre muchas otras, se ha sumado la mayor crisis sanitaria del planeta, la pandemia causada por el COVID-19.

En América Latina el panorama asume dimensiones de catástrofe. La CEPAL, en su publicación insignia *El panorama social*

de América Latina (2020), registra para 2019 cifras desalentadoras. Los indicadores de pobreza y pobreza extrema que se ubicaban en el año 2002 en 45,2 y 12,2 %, respectivamente, mostraron una significativa mejoría hasta 2014 cuando se empiezan a verificar retrocesos. Del 27,7 y el 7,8 % de ese año, en 2019 los indicadores de pobreza y pobreza extrema se ubicaban en el 30,5 y 11,5 % respectivamente. A la tendencia creciente a la pobreza de los últimos años se le suma la exacerbación de la desigualdad. Los indicadores de ingreso señalan que en 2019 el decil 1 de la población participaba en el ingreso total con un 2,4 %, en tanto que el decil 10 lo hacía con el 29 %. El coeficiente de Gini para América Latina en este mismo año fue 0,460 señalando el estancamiento en la mejoría, cuando no su retroceso, en una de las regiones más desiguales del planeta.

Tal como lo informa el reporte de la CEPAL (2020), si antes de la pandemia los problemas sociales estructurales se incrementaban: mayores niveles de la pobreza y la pobreza extrema acentuados con rigor en las zonas rurales, y entre la población infantil, indígena y afrodescendiente; incremento en el desempleo y en los niveles de empleo informal; baja cobertura en las prestaciones de protección social; mayor desigualdad de género —en particular en la dimensión del trabajo del cuidado no remunerado—, la pandemia causada por el COVID-19 trajo consigo la agudización significativa de estos problemas. La CEPAL (2021, 15) sintetiza la situación en los siguientes términos:

Aumenta la desocupación y disminuye la participación laboral, especialmente de las mujeres; caída del empleo afecta especialmente a los trabajadores informales, así como los jóvenes; deterioro de las condiciones laborales de las mujeres en el trabajo doméstico remunerado; se incrementa la desigualdad, empeora el índice de Gini; y mayor vulnerabilidad y movilidad social descendiente.

En este escenario la fragilidad del Estado y las fallas del mercado han dejado ver sus limitaciones potenciadas por lo etéreo de proyectos políticos que ponen en cuestión la democracia cuando esta se vende al mejor postor.

La fuerza de las circunstancias impone con urgencia un examen renovado tanto a cada uno de los componentes en la ecuación —Estado, mercado y sociedad— como a la naturaleza de la interacción que necesariamente les vincula. Relaciones y (des)articulaciones que por décadas han estructurado modelos de desarrollo. Es evidente que un proyecto de tal envergadura exige equipos de expertos y enfoques multidisciplinarios comprometidos con la búsqueda genuina de alternativas económicas, sociales, políticas, culturales y éticas para el logro del bienestar común.

Paradójicamente, a pesar de que buena parte de los esfuerzos hasta ahora realizados por parte de gobiernos y entidades multilaterales se han enfocado en el logro del bienestar de la “sociedad”, es tal vez a este componente de la triada al que se le ha prestado menor atención en cuanto actor estratégico. En efecto, en el marco de los modelos de desarrollo dominantes, la sociedad y lo social como sujeto, parecen diluirse en categorías cuyo rasgo común consiste en realzar el carácter receptor, pasivo, desempoderado y subordinado en el contexto de las estructuras sociales vigentes: grupos sociales vulnerables, población excluida y marginal, son algunas de las expresiones prevalecientes en los discursos dominantes.

Este enfoque hacia lo social, imbuido de tintes jerarquizadores y asistencialistas, se revela hegemónico en América Latina cuando se examinan los planes de desarrollo nacionales y subnacionales. Tiene también por consecuencia relegar —cuando no invisibilizar— las capacidades y potencialidades de la sociedad como actor decisivo en la construcción y puesta en práctica de modelos, planes y programas cuyo objetivo es logro del bienestar común.

La mayor importancia asignada a la dimensión económica y al mercado en el marco del capitalismo global, así como los in-

terrogantes nunca suficientemente resueltos sobre el papel y la estructura del Estado, parecieran otorgar un peso específico menor al tercer elemento de la ecuación: la sociedad. Este desequilibrio se expresa en ámbitos y formas diferentes. Se destacan aquí dos: en primer lugar, la menor proporción del gasto/inversión social en los presupuestos públicos. América Latina es de las regiones con menor gasto público social: en 2019 Colombia invirtió 13,1% de su PIB; Chile, el 11,4%, y México, el 7,4%, frente al 20% promedio de todos los países de la OCDE (2020). En segundo lugar, la toma de decisiones de carácter público circunscrita a restringidos espacios de poder en donde las dinámicas de deliberación democráticas quedan supeditadas a intereses y agendas particulares.

No obstante, en este contexto se promueve con intensidad el discurso de la participación ciudadana instrumentalizado como dispositivo legitimador de la toma de decisiones respecto a los asuntos públicos y del proceso involucrados. El famoso grafiti “yo participo, tú participas, otros deciden” pareciera describir la situación.

Sin embargo, en este panorama es posible discernir los rasgos de un fenómeno yuxtapuesto, lo que se pudiera denominar la otra cara de la moneda. La sociedad en su dimensión organizativa —formal e informal—, se vislumbra como un actor crucial con capacidad de agencia, proactivo frente a las circunstancias y empoderado. Las organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil emergen en los más variados ámbitos de acción de poblaciones enfrentadas a necesidades de la más variada naturaleza no satisfechas por el Estado o el mercado. Cooperativas, fondos y mutuales —las llamadas organizaciones de la economía solidaria; organizaciones cívicas—, juntas de acción comunal, asociaciones de padres, jóvenes, mujeres, minorías étnicas, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, ambientalistas, organizaciones religiosas, entre muchas otras, son una muestra del carácter vibrante proactivo y dinámico de la sociedad entretejiendo la cohesión social.

Una respuesta tentativa a la pregunta del porqué de la relativa invisibilidad y desconocimiento de las formas de funcionamiento y dinámicas de este fenómeno organizacional de la sociedad y del papel que juega en los complejos contextos económicos y políticos que marcan los rumbos del desarrollo en los países de América Latina, se puede encontrar en al menos tres factores.

En primer lugar, disciplinas del saber como la administración y la gestión han dedicado, por tradición, sus esfuerzos al estudio de un tipo particular de organización: la empresa en el contexto del sistema capitalista de producción. En consecuencia, el uso intercambiable de los términos empresa y organización ha terminado por excluir del campo de estudio e investigación disciplinar unidades de análisis distintas a las organizaciones empresariales y sus procesos cuya orientación distintiva es la maximización del lucro y la ganancia. Las organizaciones sociales han quedado, así, en un terreno de nadie, escasamente colonizado por otros campos del saber como la sociología, la antropología o el trabajo social. Solo en tiempos recientes parecen abrirse las puertas disciplinares de la administración a las organizaciones sociales. La presencia progresiva de mesas temáticas en congresos, simposios y encuentros de investigadores dedicadas a las organizaciones no empresariales, sus procesos y desafíos, son signo positivo en una necesaria dirección.

En segundo lugar, la dificultad en aprehender la existencia del fenómeno organizacional social se deriva en parte por su carácter relativamente fluido entre lo formal —estructurado, normativizado y regulado— y lo informal —espontáneo, emergente, flexible y adaptativo—. ¿Cómo se forman las organizaciones sociales? ¿Cuántas son? ¿En cuáles esferas de actividad se desempeñan? ¿Cuál es el alcance de sus acciones en la sociedad? ¿Cómo se *organizan*? Son solo algunas de las preguntas que aguardan respuestas y hacen parte de una fecunda agenda de investigación que reclama con urgencia atención.